



Gabriela Gamez &lt;ggamez@iaip.gob.sv&gt;

**Notificando Ampliación de Respuesta en Solicitud número 1741.**

Transparencia CSJ &lt;uaip.csj@gmail.com&gt;

1 de junio de 2017, 15:49

Para: Oficial Receptor - IAIP &lt;oficialreceptor@iaip.gob.sv&gt;

Apreciables señores de la Unidad de Fiscalización del Instituto de Acceso a la Información Pública,  
Presentes.

Con instrucciones de la señora Oficial de Información Interina, notifico Resolución de Ampliación de Respuesta de solicitud número 1741 bajo referencia UAIP-AR-1741-589-2016.

Agradeceré el acusar recibo.

MARTA RINA GARCÍA ORELLANA,  
Notificadora de Unidad de Acceso a la Información  
Pública del Órgano Judicial.

Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. Proteger el medio ambiente está también en su mano.

Este correo electrónico y, en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, puede contener información de carácter confidencial exclusivamente dirigida a su(s) destinatario(s). Queda prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la previa autorización de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. En caso de haber recibido este correo por error, le rogamos notifique inmediatamente esta circunstancia mediante reenvío a la dirección electrónica del remitente. Le agradecemos de antemano su colaboración.

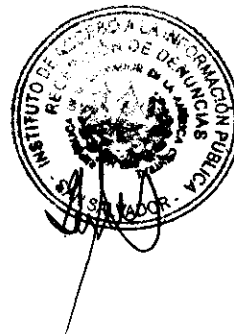
UAIP-AR-1741-589-2016.pdf  
5191K

CSJ

Identifica con \_\_\_\_\_ a las: 15:49

1 de 6 de 2017. Junto con escrito

3 ES Jhr







Gabriela Gamez <ggamez@iaip.gob.sv>

---

## Notificando Ampliación de Respuesta en Solicitud número 1741.

---

**Oficial Receptor - IAIP** <oficialreceptor@iaip.gob.sv>

2 de junio de 2017, 8:01

Para: Transparencia CSJ <uaip.csj@gmail.com>

Acuso de recibido su correo electrónico.

[El texto citado está oculto]

--  
--

**Gabriela Gámez**

**Oficial Receptor de Denuncias**

(503) 2205-3800 Fax 2205-3880 Opc. 901

Avenida Masferrer y Calle al Volcán No.88, Edif. Oca Chang

oficialreceptor@iaip.gob.sv

 Web  Twitter  Youtube



Instituto de Acceso  
a la Información Pública

---

"Fomentando la cultura de transparencia"

1. 2. 3.

4.

5.

6.

**Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial**, San Salvador, a las quince horas con cincuenta y cinco minutos del día veintinueve de mayo del año dos mil diecisiete.

Por recibidos:

1. Correo electrónico de fecha 23/12/2016, procedente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), mediante el cual remiten notificación de la resolución emitida por dicha institución a las quince horas con veinte minutos del veinte de diciembre de dos mil dieciséis, en relación con el expediente de apelación registrado con la referencia NUE 214-A-2016(CO). En dicha decisión el IAIP resuelve: "a) Revocar la resolución apelada pronunciada por el Oficial de Información de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), emitida el 6 de julio del presente año. b) Requerir al Oficial de Información de la CSJ emita la respectiva declaratoria de inexistencia de información, de acuerdo a los parámetros descritos en la presente resolución en los tres días hábiles próximos a la notificación de esta resolución. c) Remitir el presente expediente a la Unidad de Fiscalización de este Instituto para que verifique el cumplimiento de esta resolución..."(sic).

2. Memorándum con referencia 220-2017-SP, de fecha 29/05/2017, suscrito por el Sub Jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual hace referencia a la nota con referencia UAIP 13/1741/2017 y en virtud de la misma informa:

"... 3. Mediante el punto de act[a] número uno de la sesión de Corte Plena, de fecha 16 de agosto de 2016, el pleno de la Corte, tomó el siguiente acuerdo: 'se responda al peticionario que no existe la información que requiere y que se iniciará el proceso disciplinario contra el licenciado Walter René Araujo Morales'. Al respecto es de señalar:

a. De conformidad con el artículo 240 inc. 3° de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 3 de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, las declaraciones juradas de patrimonio deberán de presentarse dentro de los sesenta días siguientes a la toma de posición y cese de funciones del cargo obligado (...).

b. Aunado a eso, el referido Art. en el inciso 2° señala que 'Con el objeto de tener un control efectivo sobre las personas obligadas conforme al presente artículo, la Corte de Cuentas de la República y el Organismo o institución en que fuere nombrado o cesado el su ejercicio el funcionario o empleado, estarán en la obligación de remitir a la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, dentro del tercero día contado a partir de la fecha de toma de

posesión o ces de ejercicio'. Es decir, que la forma en que la Sección de Probidad tiene para alimentar su base de datos del universo obligado a presentar la declaración jurada de patrimonio, es a través de los informes que envían las institucionales, que tal como se señala en el artículo anterior, existe la obligación de hacerlo, pero en dicha ley no hay sanción por no hacerlo, en ese sentido, en los archivos que lleva esta Sección, no existe registro que el Tribunal Supremo Electoral hay[a] reportado el cese de funciones como Magistrado de dicho tribunal al señor Walter René Araujo Morales.

c. Por otra parte, el artículo 17 de la referida ley, establece: "La Corte Suprema de Justicia impondrá multas de cien a cinco mil colones, a los funcionarios y empleados públicos que omitieren hacer la declaración en el término indicado en el artículo 3 de la referida ley, así como también el artículo 19 inc. 3 del mismo cuerpo normativo, establece que las multas establecidas en este título serán impuestas por la Corte Suprema de Justicia, atendiendo a lo establecido por la Ley de Procedimiento para la Imposición de Arresto o Multa Administrativos y para su determinación se tomará en cuenta la categoría del funcionario o empleado".

d. En ese orden de ideas y tomando en cuenta el límite inferior y superior de la posible multa a imponer ante el incumplimiento de la obligación de declarar dentro del plazo legalmente establecido, que tal como se señaló en el párrafo anterior el máximo que señala la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, es de cinco mil colones, aunado a eso el artículo 21 literal b) de la Ley de Procedimiento para la Imposición de Arresto o Multa Administrativos, señala que la acción para promover el procedimiento a que se refiere esta ley prescribe: b) En un año cuando se trate de contravenciones sancionadas con multa superior a mil colones, sin exceder de cinco mil colones. Los plazos a que se refiere este artículo se contarán a partir de la fecha de la contravención.

e. Sobre la base de lo anteriormente, se tiene el caso del señor Walter René Araujo Morales, quien se desempeñó como Magistrado del Tribunal Supremo Electoral desde el uno de agosto de dos mil nueve al treinta y uno de julio de dos mil catorce, por lo que el plazo de los sesenta días para presentar su declaración jurada del estado de su patrimonio correspondiente al cese de funciones de su cargo corrió desde el uno de agosto hasta el veintinueve de septiembre ambas de dos mil catorce; es decir que como la cuantía máxima que señala la [L]ey sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos es de cinco mil colones, el plazo de prescripción de la acción para el inicio del procedimiento



administrativo sancionador en el caso del señor Walter René Araujo Morales, corrió desde el treinta de septiembre de dos mil catorce, fecha en que inicia la infracción, hasta el veintinueve de septiembre de dos mil quince.

f. En consecuencia, cuando Corte Plena acordó en la sesión ordinaria de fecha 16 de agosto de 2016, de que se iniciara el procedimiento administrativo sancionador en contra del señor Walter René Araujo Morales, la acción para iniciarlo ya había prescrito..."(sic).

*Considerando:*

I. El presente expediente inició el 09/06/2016, por medio de solicitud realizada por el señor Elmer Jiovanni Flores Fuentes, quien requirió lo siguiente: 1) Copias de los oficios girados por la unidad respectiva para proceder a la sanción contra el licenciado Walter René Araujo Morales por no presentar la declaración patrimonial de salida cuando fungió como Magistrado del Tribunal Supremo Electoral período 2009-2014, como se establece en el artículo 3 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, 2) Copia completa del expediente o proceso llevado a cabo para la determinación de la sanción respectiva de acuerdo al artículo 17 de la Ley antes mencionada. 3) Copia del documento en el que se haga constar la imposición de la sanción y su respectivo cumplimiento.

II. En relación con dicha petición el anterior Oficial de Información del Órgano Judicial pronunció resolución de respuesta con referencia UAIP-1741-RR-555-2016, de fecha 06/07/2016, por medio de la cual resolvió entregar al licenciado Elmer Jiovanni Flores Fuentes el memorándum con referencia 197-2016-SP, procedente de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, en el cual se hizo constar que respecto de la petición de información planteada por dicho ciudadano "... en el año 2014, se le devolvieron por parte de Corte Plena, la facultad a esta Sección para verificar si la información proporcionada en las declaraciones juradas de patrimonio es fidedigna, y debido al poco personal profesional con que cuenta esta Sección (10), entre Abogados y Auditores Públicos, es que se re[e]structuró las funciones que desempeña dicho personal, por tal motivo, no se iniciaron en ese año procesos de imposición de multa. Razón por la cual, no se ha iniciado proceso de imposición de multa en contra del señor Walter René Araujo Morales..."(sic)

Inconforme con dicha decisión el peticionario interpuso recurso de apelación para ante el IAIP, cuya admisión de fecha 28/07/2016 fue notificada a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) el 29/07/2016.

III. En el aludido recurso de apelación con referencia NUE 214-A-2014, el IAIP emitió resolución definitiva de fecha 20/12/2016, notificada a la UAIP el 23/12/2016, en la cual –entre otros aspectos– ordenó revocar la resolución apelada pronunciada por el anterior Oficial de Información del Órgano Judicial, emitida el 06/07/2016 y requirió que se emitiera la respectiva declaratoria de inexistencia de la información requerida por el peticionario.

Ahora bien, en este estado, es preciso acotar que en el expediente con referencia 1741-2016, consta el memorándum de fecha 16/08/2016, con referencia Im/125/S.G./2016, suscrito por la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, mediante el cual remite certificación del acuerdo tomado por Corte Plena en la sesión ordinaria celebrada el 16/08/2016, en este se consigna lo siguiente: “... 1) NOTA DE OFICIAL DE INFORMACIÓN UAIP/996/1741/2016 PARA HACER DEL CONOCIMIENTO DE CORTE PLENA DOCUMENTOS Y RESOLUCIÓN DE ADMISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Y SEÑALAMIENTO DE AUDIENCIA DE AVENIMIENTO EN EXPEDIENTE NUE 214-A-2016. Se llama a votar por responder al peticionario que no existe la información que requiere y que se iniciará proceso disciplinario contra el licenciado Walter René Araujo Morales: catorce votos...”.

En otras palabras, el acuerdo de Corte Plena en la que se ordena el inicio del procedimiento disciplinario en contra del aludido ex funcionario fue emitido antes del pronunciamiento de la resolución definitiva del IAIP de fecha 20/12/2016, es decir, durante la tramitación del aludido recurso de apelación.

Por tal razón, luego de haber recibido la notificación de la resolución definitiva del IAIP de fecha 20/12/2016, consta en el expediente número 1741-2016, que el anterior Oficial de Información del Órgano Judicial emitió dos notas, con referencias UAIP/13/1741/2016 y UAIP/23/1741/2016, de fechas 04/01/2017 y 06/06/2017, respectivamente, ambas dirigidas al Jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y recibidas en dicha dependencia en esas mismas fechas.

En la primera el aludido Oficial de Información indicó lo siguiente que: “... Para efectos de cumplir con la resolución emitida a las quince horas con veinte minutos del veinte de diciembre del año 2016, emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública con referencia NUE-214-A-2016(CO), se requiere que manifieste si ya se generó la siguiente información “: 1) Copias de los oficios girados por la unidad respectiva para proceder a la sanción contra el licenciado Walter Rene Araujo Morales por no presentar la declaración



patrimonial de salida cuando fungió como Magistrado del Tribunal Supremo Electoral período 2009-2014, como se establece en el artículo 3 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos. 2) Copia completa del expediente o proceso llevado a cabo para la determinación de la sanción respectiva de acuerdo al artículo 17 de la Ley antes mencionada. 3) Copia del documento en el que se haga constar la imposición de la sanción y su respectivo cumplimiento (...). En caso de no haberse generado hasta la fecha, hacerlo saber a más tardar el día jueves 5 de enero del año 2017...”

En la segunda nota indicó que el motivo de la misma “... es para reiterar, lo solicitado en la nota UAIP/13/1741/2017...”.

En ese sentido, es en virtud de las notas antes relacionadas que hasta este día se recibe el memorándum relacionado en el prefacio de esta resolución, suscrito por el Sub Jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.

III. Es en virtud de las actuaciones antes descritas que la suscrita Oficial de Información Interina del Órgano Judicial considera pertinente hacer las siguientes consideraciones:

Tomando en cuenta primero que el Sub Jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia ha informado –en síntesis– que a la fecha no es posible, acorde con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento para la Imposición del Arresto o Multa Administrativos y en la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, atender la disposición emitida por la Corte Plena en la sesión ordinaria celebrada el 16/08/2016, por cuanto el plazo para iniciar el respectivo procedimiento administrativo sancionador en contra del ex funcionario Walter René Araujo Morales, por no haber presentado la declaración patrimonial de cese de funciones del cargo de Magistrado del Tribunal Supremo Electoral del período 2009-2014, ha prescrito actualmente, pues dicho término se contabilizó desde el 30/09/2014 al 29/09/2015.

Y considerando, por otra parte, la resolución definitiva emitida por el Instituto de Acceso a la Información Pública el 20/12/2016 en el expediente con referencia NUE 214-A-2016, en la cual revocó la decisión emitida por el Oficial de Información del Órgano Judicial de fecha 06/07/2016 y ordenó la emisión de la respectiva declaratoria de inexistencia de la información solicitada por el señor Flores Fuentes, es procedente dar cumplimiento a dicha disposición.

Así, de acuerdo con lo establecido en el art. 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, cuando la información solicitada no se encuentra en los archivos de la Unidad Administrativa correspondiente, el Oficial de Información tomará las medidas pertinentes para localizarla en la dependencia y en caso de no encontrarla expedirá una resolución que confirme su inexistencia.


El propósito que dicho funcionario emita una declaratoria que confirme, en su caso, la inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que efectivamente se realizaron las gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso concreto, es decir, que se dé certeza al solicitante del carácter exhaustivo de la búsqueda de la información solicitada.

Así, en la resolución definitiva de fecha 20/12/2016, pronunciada en el expediente registrado con la referencia NUE-214-A-2016(CO), el Instituto sostuvo que "... no solo basta con argumentar que la información que ha solicitado no existe, sino que se debe demostrar que efectivamente se realizaron gestiones necesarias para la ubicación de la información de su interés, y que éstas fueron las adecuadas para atender a la particularidad del caso...".

Precisamente, esto es lo que ha ocurrido en el presente caso, pues el Sub Jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia informó por medio del memorándum con referencia 197-2016-SP, de fecha 30/06/2016, que no se inició el respectivo procedimiento administrativo de imposición de multa en contra del señor Walter René Araujo Morales, ello fue comunicado al peticionario mediante la resolución de respuesta del 06/07/2016, la cual fue impugnada ante el IAIP.

Posteriormente, durante el trámite de dicha apelación, se tiene que el 16/08/2016 la Corte Plena ordenó —entre otros aspectos— que se iniciara el respectivo procedimiento administrativo sancionador contra el aludido ex funcionario por la omisión de presentar la declaración patrimonial de cese del cargo de Magistrado del Tribunal Supremo Electoral del periodo de 2009 al 2014; de ahí que, a la fecha en que se recibió la notificación de la resolución definitiva del IAIP en la que se ordenó emitir la respectiva declaratoria de inexistencia (23/12/2016), el anterior Oficial de Información del Órgano Judicial consideró pertinente que previo a dar cumplimiento a tal decisión debía corroborar si, *a esa fecha*, ya se había generado la información requerida por el peticionario en virtud de la decisión emitida por la Corte Plena el 16/08/2016.

En ese sentido, siendo que se ha documentado que en el momento en que fue requerida la información por parte del señor Flores Fuentes la misma no existía –según se ha expresado en líneas precedentes– y habiéndose informado que, a esta fecha, no es posible iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio en contra del señor Walter René Araujo Morales ordenado por Corte Plena el 16/08/2016, la suscrita Oficial de Información Interina del Órgano Judicial considera pertinente dar cumplimiento a la citada decisión del IAIP, pues el concreto requerimiento de información planteado por el ciudadano aludido no existe a esta fecha y tampoco podrá generarse al haber prescrito el plazo para dar inicio al aludido procedimiento administrativo de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento para la Imposición del Arresto o Multa Administrativos; por tanto, resulta pertinente confirmar –a esta fecha– la inexistencia de la petición de información detallada en el considerando I de esta resolución.



Finalmente, es preciso acotar que si bien el IAIP en la citada resolución definitiva dispuso un plazo perentorio de “... tres días hábiles próximos a la notificación de esta resolución...” para que el Oficial de Información del Órgano Judicial emitiera la respectiva declaratoria de inexistencia, en el presente caso, –tal como se ha detallado en los apartados precedentes– concurrió una *circunstancia excepcional durante la tramitación del recurso de apelación* (en virtud del acuerdo de Corte Plena de fecha 16/08/2015) que impidió dar cumplimiento inmediato a la decisión de fecha 20/12/2016, pues de haberse dictado en esa época la correspondiente declaratoria de inexistencia se corría el riesgo de inobservar el principio de integridad que regula el art. 4 letra d) de la Ley de Acceso a la Información Pública, el cual prescribe que “... la información pública debe ser *completa, fidedigna y veraz...*”, pues la información requerida pudo haberse generado en virtud de la decisión de Corte Plena, lo cual no ocurrió en el presente caso, según ha informado el Sub Jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, por haber prescrito el plazo para iniciar el correspondiente procedimiento administrativo sancionador.

IV. Finalmente, se aclara que la suscrita fue nombrada como Oficial de Información Interina del Órgano Judicial por acuerdo suscrito por el Presidente del Órgano Judicial de fecha 28 de febrero de 2017, asumiendo dicho cargo a partir del 1 de marzo del corriente año.

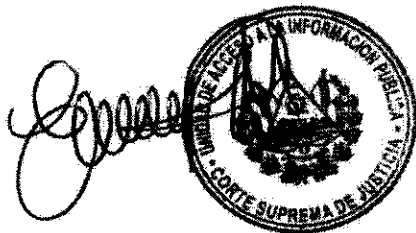
Por tanto, con base en los arts. 62 inc. 2º, 71, 72 y 73 de la Ley de Acceso a la Información Pública, se resuelve:

1. Confirmar la inexistencia, al 29/05/2017, de la información requerida por el licenciado Elmer Jiovanni Flores Fuentes, consistente en: 1) Copias de los oficios girados por la unidad respectiva para proceder a la sanción contra el licenciado Walter René Araujo Morales por no presentar la declaración patrimonial de salida cuando fungió como Magistrado del Tribunal Supremo Electoral período 2009-2014, como se establece en el artículo 3 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, 2) Copia completa del expediente o proceso llevado a cabo para la determinación de la sanción respectiva de acuerdo al artículo 17 de la Ley antes mencionada; y, 3) Copia del documento en el que se haga constar la imposición de la sanción y su respectivo cumplimiento.

2. Entregar al licenciado Elmer Jiovanni Flores Fuentes el memorándum con referencia 220-2017-SP, de fecha 29/05/2017, suscrito por el Sub Jefe de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia, relacionado en el prefacio de esta resolución.

3. Hacer del conocimiento de la Unidad de Fiscalización del Instituto de Acceso a la Información Pública el presente pronunciamiento, a efecto de que se tenga por cumplida la resolución definitiva emitida en el expediente con referencias NUE 214-A-2016.

4. Notifíquese.



Me